
FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS

FICHA 1.

OBJETO: “Prestar por sus propios medios, con plena autonomía técnica, administrativa y operacional sus servicios profesionales para asumir la representación judicial y extrajudicial, defensa jurídica y asesoría a la Federación Colombiana de Municipios en cumplimiento de la función pública asignada”.

Bogotá D.C, enero de 2021

SOMOS REFERENTES DEL EMPODERAMIENTO Y DESARROLLO MUNICIPAL

☎ 57(1) 5934020 - Fax: 57 (1) 5934027

✉ fcm@fcm.org.co - contacto@fcm.org.co 🌐 www.fcm.org.co

📍 Cra7. N° 74B-56 - Piso 18 Bogotá D.C. Colombia - Suramérica

1. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD

La Federación Colombiana de Municipios es una entidad de carácter privado, sin ánimo de lucro, de naturaleza asociativa y de carácter gremial, que se rige por el derecho privado, organizada con base en la libertad de asociación prevista en el artículo 38 de la Constitución Política y que cumple con los objetivos misionales, entre los que se puede señalar: la promoción, la integración y la articulación de acciones que apuntan al desarrollo y bienestar de los municipios en Colombia, teniendo como finalidad la defensa de sus intereses. Su personería jurídica es propia y diferente de la de sus asociados, con autonomía administrativa y patrimonio propio. Sus bienes no pertenecen en forma individual a ninguno de sus asociados y los mismos deben destinarse al apoyo de la labor que cumple a favor de sus asociados.

Por disposición del artículo 10 de la Ley 769 de 2002, “Código Nacional de Tránsito”, le ha sido asignada una función pública a la Federación Colombiana de Municipios, consistente en implementar y mantener actualizado a nivel nacional, un Sistema Integrado de Información sobre las Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito – Simit, en el cual se consolidan los registros de infractores a nivel nacional para garantizar la no realización de trámites cuando el infractor no se encuentre a paz y salvo por dicho concepto, con el propósito de contribuir al mejoramiento de los ingresos de los municipios.

En el señalado artículo 10 de la Ley 769 de 2002, el legislador asignó a la Federación Colombiana de Municipios, por concepto de la administración del Sistema Integrado de Información sobre las Multas y Sanciones por Infracción de Tránsito – Simit, un porcentaje equivalente al 10%, una vez se cancele por parte del infractor el valor adeudado, el cual en ningún caso podrá ser inferior a medio salario mínimo diario legal vigente.

Que, en este orden de ideas, se tiene que el rol propio de la función pública que cumple la Federación Colombiana de Municipios y la gestión fiscal que debe realizar por administrar y manejar recursos públicos con sujeción a los principios de legalidad, eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia y publicidad, lleva a que se encuentre sometida a la constante vigilancia por parte de la Contraloría General de la República y los demás entes de control.

En desarrollo de dicha función pública, cuyo fundamento constitucional se esgrime en el artículo 209 de la Carta Política, el Sistema Integrado de Información sobre las Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito - Simit, se encuentra sometido a las normas propias del derecho público en cuanto a los regímenes de los actos unilaterales, la contratación, los controles y la responsabilidad, los cuales son propios de las entidades estatales, siendo aplicable entonces para la presente contratación, los procedimientos contemplados en la Ley 80 de 1993, modificada por la Ley 1150 de 2007, y el Decreto 1082 de 2015.

Para mantener en funcionamiento el sistema con una infraestructura y logística de calidad en el territorio nacional, la Federación Colombiana de Municipios en cumplimiento de la función pública asignada debe, y está autorizada para desarrollar actividades de carácter administrativo, gerencial y operativo que implican costos, gastos e inversiones permanentes. Estas

erogaciones deben ser cubiertas con el recaudo del 10% de los pagos que realicen los infractores.

Al respecto, la Corte Constitucional en sentencias C-385 y C-477 de 2003, al resolver la exequibilidad de los artículos 10 y 11 de la Ley 769 de 2002 sobre los cuales se produjo la cosa juzgada absoluta, señaló:

“El funcionamiento del sistema integrado de información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito a que se ha hecho alusión, requiere de una actividad de carácter administrativo y de una infraestructura para el efecto, que garanticen que el mecanismo ideado por el legislador tenga un adecuado y permanente funcionamiento, susceptible de perfeccionamiento con el tiempo, para que se fortalezca, cada vez más el ingreso de los municipios por ese concepto.”

Conforme a la anterior normatividad surge para las autoridades de tránsito territoriales la obligación legal no solo de reportar al Simit, toda la información relacionada con las multas y sanciones por infracciones a las normas de tránsito que se imponen al interior de cada jurisdicción, sino también la obligación legal de efectuar las transferencias del 10% sobre cada recaudo que realice por dicho concepto, a la Federación Colombiana de Municipios.

Para la presente vigencia, la Federación Colombiana de Municipios debe continuar velando por la defensa idónea de sus intereses en materia jurídica, y adelantar acciones tendientes a obtener de las autoridades de tránsito territoriales las transferencias pendientes en virtud de lo dispuesto en el artículo 10 en concordancia con el artículo 160 de la Ley 769 de 2002.

Actualmente, se encuentran activos varios procesos judiciales y extrajudiciales en diferentes ciudades del país, en los cuales la Federación Colombiana de Municipios en su calidad de administrador de función y recurso público, actúa como accionante y en otros como accionado, dentro de los cuales se encuentran acciones populares, acciones de tutela, acciones de nulidad simple, nulidad y restablecimiento del derecho, ejecutivos, responsabilidad fiscal y acciones penales entre otros, que requieren de actuaciones especializadas y estratégicas de seguimiento y defensa judicial, a fin de proteger los intereses de la entidad.

En vista de los antecedentes expuestos, la defensa jurídica de los intereses de la función pública, reviste gran importancia, ya que los resultados que puedan derivarse de los fallos, tienen un alto impacto para el Simit y su operación a nivel nacional, por lo cual se requiere contar con representación judicial y extrajudicial idónea en determinados procesos, así como asesoría externa especializada en defensa jurídica y los propios de la función pública que desempeña la Federación Colombiana de Municipios, y para ello debe contarse con un profesional del derecho que cuente con amplia experiencia en defensa judicial, especialmente de entidades públicas.

En desarrollo del plan estratégico del Simit, y en el marco de los objetivos de posicionamiento y creación de valor, se debe continuar con la defensa jurídica y representación extrajudicial de la Federación Colombiana de Municipios en cumplimiento de la función pública asignada, a través de la representación judicial y extrajudicial de procesos, dependiendo de la calidad que

ostente la Federación en cada uno de ellos, que permitan de un lado generar condiciones para que los organismos de tránsito cumplan a cabalidad lo establecido en los artículos 10 y 11 de la Ley 769 de 2002, y de otro que se cuente con apoyo idóneo para aplicar políticas de defensa jurídica.

Igualmente, en cumplimiento de la función pública asignada en el Código Nacional de Tránsito Terrestre, la Federación Colombiana de Municipios, requiere apoyo y asesoramiento jurídico especializado en la función pública del Simit, especialmente en lo relacionado con la defensa jurídica y observaciones a los proyectos de Ley que puedan impactar la operación del sistema.

Considerando que en la planta de personal de la entidad no se cuenta con personal idóneo suficiente para llevar a cabo la asesoría y representación judicial y extrajudicial de la entidad en los diferentes procesos y acciones que se encuentran en curso, y eventualmente de aquellas que deban iniciarse en cumplimiento de la función pública asignada, se requiere efectuar la contratación de un asesor externo, que a su vez formule recomendaciones en materia de defensa judicial, apoye la proyección de conceptos jurídicos en dicha materia y en lo relacionado con la función pública Simit y pronunciamientos sobre los proyectos ley.

Conforme lo anterior, la Federación Colombiana de Municipios, requiere contratar los servicios profesionales de un abogado con conocimientos especializados en derecho Público y/o Administrativo, y/o Constitucional y/o Procesal, y con experiencia de más de cinco (5) años en derecho administrativo y defensa judicial que represente judicial y extrajudicialmente a la Federación Colombiana de Municipios, en los procesos que le sean asignados, incluyendo su seguimiento permanente y las actuaciones idóneas y oportunas que deban adelantarse en cada uno de ellos, así como brindar asesoría jurídica a través de conceptos escritos y verbales, en temas de defensa jurídica y demás relacionados con el Simit.

2.OBJETO A CONTRATAR

“Prestar por sus propios medios, con plena autonomía técnica, administrativa y operacional sus servicios profesionales para asumir la representación judicial y extrajudicial, defensa jurídica y asesoría a la Federación Colombiana de Municipios en cumplimiento de la función pública asignada”.

3.ALCANCE DEL OBJETO

No aplica para el presente proceso de contratación.

4.IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO EN EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS – UNSPSC

El objeto del presente proceso está codificado en el Clasificador de Bienes y Servicios – UNSPSC así:

Clasificación UNSPSC	Grupo	Segmento	Familia	Clase	Productos
80121610	Servicios	Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos	Servicios legales	Servicios de derecho comercial	Servicios legales de cobro de deudas o cartera.

5.CONDICIONES TÉCNICAS DEL BIEN O SERVICIO:

No aplica para el presente proceso de contratación.

6.PERFILES MÍNIMOS REQUERIDOS:

Se requiere contar con los servicios profesionales de un abogado con amplia trayectoria académica y profesional en representación judicial y extrajudicial, defensa jurídica y asesoría con más de cinco (5) años de experiencia comprobada, prestando sus servicios profesionales especializados en el sector público y que haya ejercido con buen crédito su profesión.

7.VALOR DEL CONTRATO

El valor del presente contrato es hasta por la suma de **CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M.L. (\$145.720.237)**. incluido IVA.

8.FORMA DE PAGO

El valor del contrato será cancelado al contratista en doce (12) cuotas mes vencido, la primera cuota por la suma de **SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M.L. (\$6.335.662)** incluido IVA y once cuotas iguales, sucesivas y vencidas cada una por valor de **DOCE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS M.L. (\$12.671.325)** incluido IVA.

El tipo de remuneración que se considera adecuado para este tipo de contrato desde la eficacia, eficiencia y economía del proceso de contratación, es un valor fijo mensual por concepto de honorarios profesionales, hasta finalizar el plazo pactado, atendiendo a que la prestación de servicios se realizará de forma permanente, en virtud del recurso público que administra la Federación Colombiana de Municipios, en virtud de la función pública designada por el legislador a través de los artículos 10 y 11 de la Ley 769 de 2002.

Por ello dentro de las obligaciones del contratista se impone la de presentar un informe mensual de actividades, que deberá ser verificado por el supervisor que sea designado por la entidad.

Este tipo de remuneración se encuentra acorde a las formas de pago que se han adoptado en contratos de esta misma naturaleza, no solo en la Federación Colombiana de Municipios, sino

en otras entidades del estado, lo que indica que se encuentra dentro de las condiciones que permite el legislador y que se encuentran presentes en el sector.

Por ser un contrato de prestación de servicios profesionales que se ejecuta con plena autonomía administrativa y operacional, razón por la cual su cumplimiento se verifica únicamente frente a los productos entregados y las actividades ejecutadas en estricto cumplimiento de lo pactado.

En razón de lo anterior, la Federación concurrirá al pago de los honorarios que sean pactados, dentro de los treinta (30) días siguientes, previa presentación de informe mensual de actividades, de la factura, de la constancia del pago de aportes a seguridad social integral y el visto bueno e informe escrito del supervisor del contrato.

El supervisor designado deberá verificar y certificar en un informe escrito el cumplimiento de las obligaciones contractuales, el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y dará su visto bueno para tramitar cada uno de los pagos.

El valor del contrato quedará sujeto a las correspondientes apropiaciones presupuestales a que haya lugar de la vigencia fiscal del 2021.

9. NÚMERO DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Para efectos presupuestales la Federación Colombiana de Municipios, cuenta con la disponibilidad presupuestal No. 2021-00033 del 15 de enero de 2021, para atender el gasto que demande el contrato que se derive del presente proceso de contratación, con cargo al gasto presupuestal – Fondo de Renovación, Contingencias y Fortalecimiento Institucional – Secretaría General, rubro 2.11.2.02.02.008.003, para la vigencia fiscal de 2021, por valor de **CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M.L. (\$145.720.237)**, expedido por la Secretaría General.

10. PLAZO

El plazo de ejecución del presente contrato será a partir de la suscripción del acta de inicio entre supervisor y contratista y hasta el 30 de diciembre de 2021.

11. OBLIGACIONES

El contratista deberá cumplir con las siguientes obligaciones:

GENERALES

1. Guardar absoluta reserva sobre toda la información y documentación de la cual llegará a tener conocimiento en cumplimiento de obligaciones asignadas.
2. Abstenerse de revelar, entregar o divulgar a terceros información, salvo autorización previa y expresa de LA FEDERACIÓN, durante la vigencia del presente contrato o

después de la finalización de su ejecución, so pena de incurrir en las acciones legales pertinentes.

3. Presentar al supervisor, junto con el informe de actividades y la factura, la certificación de pago de seguridad social integral.
4. Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y entramamientos.
5. Disponer lo necesario para que el objeto del presente contrato se cumpla a cabalidad.
6. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de obligarle a hacer u omitir algún acto o hecho, informando inmediatamente a la FEDERACIÓN y demás autoridades competentes cuando se presenten tales peticiones o amenazas.
7. Constituir la garantía solicitada, dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de suscripción del contrato.
8. No ceder ni subcontratar el presente contrato, sin la autorización expresa y escrita de LA FEDERACIÓN.

ESPECÍFICAS

1. Brindar asesoría jurídica, de forma personal, virtual o telefónica en todo lo relacionado con las acciones judiciales y extrajudiciales que adelante la Federación Colombiana de Municipios.
2. Asesorar y apoyar al grupo jurídico de la Federación Colombiana de Municipios en cumplimiento de la función pública asignada en la estrategia de defensa jurídica de los procesos judiciales y extrajudiciales, presentando recomendaciones y soluciones jurídicas, en relación con los procesos en los que es parte la Federación Colombiana de Municipios.
3. Representar judicial y extrajudicialmente a la Federación Colombiana de Municipios en cumplimiento de la función pública asignada, en los procesos que le sean asignados por la Coordinación Jurídica.
4. Emitir los conceptos que le sean solicitados de forma verbal y/o escrita sobre los asuntos jurídicos relacionados con las funciones del grupo jurídico de la Federación Colombiana de Municipios, respecto de los cuales haya de fijarse una posición jurídica.
5. Asesorar y recomendar jurídicamente la solución de las distintas controversias, recursos y demás solicitudes que se presenten en relación con los acciones judiciales y extrajudiciales en los que es parte la Federación Colombiana de Municipios en cumplimiento de la función pública asignada.
6. Asistir a las reuniones, diligencias judiciales y audiencias que la Coordinación Jurídica de la Federación Colombiana de Municipios le solicite.
7. Cumplir como contratista independiente con las obligaciones de afiliación al Sistema de Seguridad Social integral, conforme lo dispuesto en la Ley 100 de 1993, y demás disposiciones concordantes.
8. Presentar mensualmente a la Federación Colombiana de Municipios, informes escritos sobre las actividades desarrolladas, las cuales serán verificadas por el supervisor del contrato.
9. Las demás que le sean asignadas, siempre y cuando tengan relación con el objeto contractual y las exigencias legales.

OBLIGACIONES DE LA FEDERACIÓN

1. Pagar a EL CONTRATISTA el valor convenido en las fechas y forma establecida.
2. Entregar oportunamente o poner a disposición de EL CONTRATISTA los elementos, documentos, datos e informes necesarios para el eficiente y eficaz cumplimiento del objeto contractual.
3. Exigir a EL CONTRATISTA la calidad en los servicios prestados objeto del contrato.
4. Velar por el cumplimiento de todas las cláusulas contractuales.
5. Exigir a EL CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato.
6. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y pago de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar.

12. IDONEIDAD

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del Decreto 019 de 2012, en los procesos de contratación directa, no es necesaria la inscripción de los contratistas en el Registro Único de Proponentes.

Sin embargo, para efectos de esta contratación, la entidad verificará las condiciones del contratista a través de los siguientes documentos, que deberán ser aportados junto con la propuesta.

1. Fotocopia de la cédula de ciudadanía.
2. Copia del Registro Único Tributario del RUT expedido por la DIAN, actualizado con las nuevas actividades económicas.
3. Copia del Registro de Información Tributaria – RIT.
4. Constancia de afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud y Pensión).
5. Certificado de antecedentes disciplinarios, expedido por la Procuraduría General de la Nación.
6. Certificado de antecedentes fiscales, expedido por la Contraloría General de la República.
7. Certificado de antecedentes, expedido por la Policía Nacional de Colombia.
8. Paz y salvo de multas frente al código de policía.
9. Certificado de Antecedentes Disciplinarios de Abogados expedido por el Consejo Superior de la Judicatura.
10. Formato de declaración juramentada de bienes y rentas, debidamente diligenciado.
11. Formato Único de Hoja de Vida de la Función Pública para personas naturales, debidamente diligenciado.
12. Copia de la Tarjeta Profesional de Abogado.
13. Copia del diploma y/o acta de grado pregrado y postgrado.

14. Certificaciones de experiencia que acrediten el cumplimiento de los requisitos exigidos por la entidad y relacionados en la hoja de vida.

Para efectos de la presente contratación, se recibió propuesta de servicios profesionales de la Doctora Gladys Alicia Dimaté Jiménez, abogada de la Universidad Nacional de Colombia, Magíster en Derecho Administrativo de la Universidad Libre, Especialista en Derecho Penal y Derecho Constitucional de la Universidad del Rosario, y otros estudios complementarios como diplomados y seminarios en materia de derecho.

Con amplia experiencia en el manejo de acciones constitucionales, procesos ante el Contencioso Administrativo, mecanismos alternativos de solución de conflictos, en asuntos administrativos y públicos, en defensa y representación judicial, y asesoría en procesos judiciales y extrajudiciales en el sector público.

Así mismo, en la elaboración de conceptos, análisis de proyectos de ley, y en asesoría en temas de tránsito y demás asuntos encaminados al correcto y eficiente desarrollo de la función pública.

La Doctora Gladys Alicia Dimaté Jiménez, cuenta con experiencia como asesora jurídica de entidades estatales por más de quince (15) años y en temas relacionados con tránsito y transporte y en los temas relacionados con la función pública contenida en los artículos 10 y 11 de la Ley 769 de 2002 cerca de diez (10) años.

La profesional se ha desempeñado y prestado sus servicios profesionales de abogada para la defensa judicial y extrajudicial del sector público, en diversas entidades, a saber: las alcaldías de Anapoima, Tocaima, Soacha y Personería Municipal del Municipio de Tena y Soacha, la Federación Colombiana de Municipios en su función pública, entre otras entidades; tal y como consta en su hoja de vida y certificaciones que así lo confirman.

Así mismo, cuenta con experiencia en asesoría jurídica, control y vigilancia de la actividad administrativa y en asuntos de conciliación ante el Ministerio Público.

Una vez analizada la experiencia de la Doctora Gladys Alicia Dimaté Jiménez, la entidad determinó que es la persona idónea para prestar sus servicios profesionales para asumir la representación judicial y extrajudicial de los procesos que le sean asignados; así mismo para brindar la asesoría jurídica en los temas relacionados con la función pública contenida en el artículo 10 de la Ley 769 de 2002, atendiendo a su formación académica como abogada especializada y con magister, y a su experiencia profesional en defensa judicial y asesoría jurídica en distintas entidades del sector público.

De otra parte, la entidad ya ha contado con los servicios profesionales de la Doctora Gladys Alicia Dimaté, quien ha brindado la asesoría jurídica y la representación judicial de los procesos judiciales y extrajudiciales de forma personalizada, continúa y con criterios uniformes en atención a la función pública y defensa de los intereses de la Federación Colombiana de Municipios y, acorde a los cambios normativos y jurisprudenciales.

Lo anterior, representa para la entidad una ventaja más para celebrar el presente proceso de contratación con la doctora Gladys Alicia Dimaté Jiménez, por cuanto el derecho de tránsito involucra también conocimientos en materia de derecho administrativo e incluso penal y civil, y al ser la Federación Colombiana de Municipios a través del artículo 10 de la Ley 769 de 2002, el autorizado para implementar y mantener actualizado a nivel nacional el sistema integrado de información sobre las multas y sanciones por infracciones de tránsito (Simit), a la hora de fijar posturas en materia de defensa jurídica, los conocimientos de la doctora Dimaté constituyen un factor de idoneidad frente al perfil.

En síntesis, la Doctora Gladys Alicia Dimaté Jiménez posee experiencia en temas de representación judicial y extrajudicial de entidades públicas, a quienes igualmente ha asesorado.

Por lo ya señalado, la Doctora Gladys Alicia Dimaté Jiménez, es la persona idónea para ejecutar el contrato que se pretende suscribir, atendiendo a su conocimiento, experiencia y trayectoria en los temas objeto del contrato.

13. SUPERVISIÓN

De conformidad con lo establecido en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, se establece que el contrato que se derive del presente proceso de selección será vigilado a través de un supervisor. La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del contrato.

Por lo anterior, y atendiendo el objeto del contrato, la Federación Colombiana de Municipios, establece que el perfil del supervisor del presente proceso de selección, debe ser un profesional de la Coordinación Jurídica que cumpla con las calidades y conocimientos propios de la labor a desarrollar.

Por esta razón, la supervisión del contrato será ejercida por la Profesional Daniela Carolina San Juan Reyes de la Coordinación del Grupo Jurídico de la Federación Colombiana Municipios, o quien haga sus veces o quien designe el Director Ejecutivo, quien ejercerá el control y vigilancia de la ejecución del contrato y tendrá a su cargo entre otras funciones velar por el cumplimiento del objeto y de las obligaciones de este.

Igualmente será responsable de recibir los bienes, aceptar los servicios y autorizar los pagos, y responderá por los hechos y omisiones que les fueren imputables en los términos previstos en el artículo 84 de la Ley 1474 y de las demás normas legales y reglamentarias que regulan el ejercicio de la supervisión de los contratos.

Atentamente,

Original firmado

JULIO ALFONSO PEÑUELA SALDAÑA

Coordinador Jurídico

Proyectó: Sandra Lucia Gómez Ruiz – Profesional del Grupo Jurídico

Revisó: Julio Alfonso Peñuela Saldaña – Coordinador Jurídico

Aprobó: Julio Alfonso Peñuela Saldaña – Coordinador Jurídico

SOMOS REFERENTES DEL EMPODERAMIENTO Y DESARROLLO MUNICIPAL

☎ 57(1) 5934020 - Fax: 57 (1) 5934027

✉ fcm@fcm.org.co - contacto@fcm.org.co 🌐 www.fcm.org.co

📍 Cra7. N° 74B-56 - Piso 18 Bogotá D.C. Colombia - Suramérica